

ÍNDICE AI: AFR 62/06/95

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 23 DE AGOSTO DE 1995

ZAIRE: AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA LA REPATRIACIÓN FORZADA DE LOS REFUGIADOS RUANDESES Y BURUNDESES EN UNA CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL PRIMER MINISTRO ZAIREÑO

Amnistía Internacional ha condenado la repatriación forzada de al menos 10.000 refugiados ruandeses y burundeses de los campamentos del este de Zaire llevada a cabo desde el 19 de agosto.

En una carta abierta al primer ministro zaireño Kengo wa Dondo, la organización de derechos humanos ha pedido que se ponga fin inmediatamente a la repatriación forzada de refugiados ruandeses y burundeses del Zaire.

«Estos actos de repatriación forzada constituyen una clara vulneración del derecho internacional por las autoridades zaireñas y contribuirán, sin lugar a dudas, a que aumente la tensión en la región», ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Como Estado parte de los tratados de las Naciones Unidas y de la Organización para la Unidad Africana que protegen los derechos de los refugiados, Zaire se ha comprometido a respetar el principio de no devolución forzada.

Para empeorar las cosas, no se está procurando proteger a las personas más vulnerables. Los niños han sido separados de sus padres en operaciones de agrupamiento apresuradas e indiscriminadas.

«Tememos que en la situación de pánico producida se produzca la muerte de algunos refugiados y que se niegue la ayuda humanitaria a los que han huido», ha dicho Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de que algunos soldados zaireños han maltratado a los refugiados mientras les obligaban a entrar en los camiones y autobuses que los transportaban a la frontera. Se han recibido informes de soldados que han saqueado la propiedad de los refugiados y han quemado las viviendas del campamento de Mugunga.

El secretario general de Amnistía Internacional ha pedido al primer ministro que deje claro a los jefes de las unidades del ejército zaireño de la zona que los malos tratos a los refugiados son una violación de derechos humanos que no serán tolerados. También ha instado al primer ministro zaireño a que garantice que las personas responsables de estas violaciones serán puestas a disposición judicial.

«Las organizaciones humanitarias y los periodistas deben poder acceder a los campamentos donde se está agrupando a los refugiados para ser deportados de modo que los soldados zaireños no puedan maltratarlos sin que la comunidad internacional tenga conocimiento de ello», ha dicho Amnistía Internacional.

Los refugiados ruandeses han sido reacios a volver a sus domicilios. Han visto como durante el año pasado, muchas personas de Ruanda han sido detenidas arbitrariamente y de forma prolongada en cárceles extremadamente hacinadas donde han muerto o «desaparecido» más de 1.000 detenidos. También temen que pueden ser perseguidos por otros sectores de la población local.

El aumento de la violencia y de la inseguridad en Burundi también representa una grave amenaza para los ciudadanos burundeses obligados a volver a su país. Se debe permitir a los refugiados que elijan volver voluntariamente hacerlo pero no se debe obligar a ninguno a volver contra su voluntad.

Entre los refugiados hay personas que participaron en el genocidio cometido en Ruanda en 1994. El gobierno zaireño debe aprobar las leyes necesarias para permitir que su país entregue a estos presuntos responsables al Tribunal Internacional para Ruanda. Amnistía Internacional cree que esto sería un paso importante para crear las condiciones necesarias para permitir que otros refugiados volvieran voluntariamente.

La organización comprende que esta prolongada presencia de un número tan elevado de refugiados supone una pesada carga para la población local de Zaire y que el hacinamiento está teniendo un impacto negativo en el entorno de la zona.

En los últimos meses, la situación de seguridad se ha deteriorado como lo indican los informes sobre el incremento de los ataques realizados por los grupos armados ruandeses que utilizan los campamentos de Zaire como base para realizar incursiones en Ruanda, y las denuncias de ataques de los soldados gubernamentales ruandeses contra los refugiados de su país en Zaire. Amnistía Internacional siente preocupación por los constantes abusos contra los derechos humanos y la intimidación ejercida por los dirigentes de los refugiados ruandeses dentro de los campamentos.

Sin embargo, ninguno de estos factores justifica la repatriación forzada de refugiados, entre ellos niños, muchos de los cuales no participaron en modo alguno en las hostilidades. Por el contrario, estas medidas probablemente exacerbarán las tensiones e intensificarán el conflicto.

Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que contribuya a terminar con la crisis humanitaria y de derechos humanos en la región de los Grandes Lagos.

«Los gobiernos deben ofrecer su colaboración para permitir a los refugiados ser trasladados a donde puedan vivir pacíficamente y sin temor por los abusos contra los derechos humanos», ha dicho Amnistía Internacional. «Sin respeto por los derechos humanos de los refugiados y de los ciudadanos de sus países anfitriones, hay pocas esperanzas de una paz duradera».

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones a los gobiernos de Ruanda y de Burundi que respeten los derechos humanos y creen el clima de confianza y de seguridad necesarios para animar a los refugiados a volver. Esto debe incluir la protección de los refugiados una vez que vuelven y la garantía de que no serán sometidos a abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno zaireño continúa siendo responsable de garantizar la seguridad de los refugiados en el Zaire hasta que deseen volver y puedan hacerlo en condiciones de seguridad y de dignidad.